



Dirección General
de Infancia, Familia
y Fomento de la Natalidad
CONSEJERÍA DE FAMILIA,
JUVENTUD Y ASUNTOS SOCIALES



INFORME JUSTIFICATIVO DE LA NECESIDAD E IDONEIDAD DE LA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS DENOMINADO “GESTIÓN DE PISO ESPECIALIZADO EN MENORES EXTRANJERAS NO ACOMPAÑADAS SUSCEPTIBLES DE SER VÍCTIMAS DE TRATA Y/O EXPLOTACIÓN SEXUAL, POSIBLES TESTIGOS PROTEGIDOS, ADSCRITO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFANCIA, FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD (5 PLAZAS)”

De acuerdo con el artículo 28 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), la necesidad de celebración de este contrato se justifica atendiendo a las siguientes consideraciones:

La **Convención de los Derechos del Niño y de la Niña del año 1989** les reconoce como sujetos de derechos y les hace merecedores de una especial protección.

Concretamente, en su **artículo 19** se establece que los Estados Partes *adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo.*

Estas medidas de protección deberían comprender, según corresponda, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos al niño y, según corresponda, la intervención judicial.

El **artículo 34**, a su vez, recoge que los Estados Partes se comprometen a proteger al niño **contra todas las formas de explotación y abuso sexuales.**

Con este fin, los Estados Partes tomarán, en particular, todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir:

- a) ***La incitación o la coacción para que un niño se dedique a cualquier actividad sexual ilegal;***
- b) ***La explotación del niño en la prostitución u otras prácticas sexuales ilegales;***
- c) ***La explotación del niño en espectáculos o materiales pornográficos.***

De acuerdo con el artículo 35 también tomarán *todas las medidas de carácter nacional, bilateral y multilateral que sean necesarias para impedir el secuestro, la venta o la trata de niños para cualquier fin o en cualquier forma y en el artículo 36 se declara la protección del menor contra todas las demás formas de explotación que sean perjudiciales para cualquier aspecto de su bienestar.*

Asimismo, los Estados Partes adoptarán todas las *medidas apropiadas para promover la recuperación física y psicológica y la reintegración social de todo niño víctima de cualquier forma de abandono, explotación o abuso; tortura u otra forma de tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes; o conflictos armados. Esa recuperación y reintegración se llevarán a cabo en un ambiente que fomente la salud, el respeto de sí mismo y la dignidad del niño (artículo 39).*

El Consejo de Europa, asimismo, cuenta con estándares internacionales para garantizar la protección de los derechos de las personas menores de edad como son el Convenio para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual (Convenio de Lanzarote), el Convenio sobre prevención y lucha contra la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), el Convenio sobre la lucha contra la trata de seres humanos o el Convenio sobre la Ciberdelincuencia; además de incluir en la Estrategia del Consejo de Europa para los derechos del niño (2016-2021) un llamamiento a todos los Estados miembros para erradicar toda forma de castigo físico sobre la infancia

Asimismo, desde el prisma de la normativa europea, recogiendo la directiva Europea 36/2011 apartados y medidas concretas en relación a los menores de edad y su condición de víctima de trata, **instando la creación de recursos adecuados para su atención.**

La trata de menores constituye un caso especial de trata de seres humanos según se define en el Convenio del Consejo de Europa sobre trata. Con arreglo al artículo 4, párrafo c, la captación, el transporte, el traslado, el alojamiento o la acogida de un niño o de una niña (que se define como una persona de menos de dieciocho años) con fines de explotación tendrán la consideración de trata de seres humanos, aunque no apelen a ninguno de los medios enunciados en párrafo (a) del artículo 4.

En el marco legislativo propio, el **art. 39 de la Constitución Española** establece que:

1. Los poderes públicos aseguran la protección social, económica y jurídica de la familia.
2. Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales estos ante la Ley con independencia de su filiación y de la madre, cualquiera que sea su estado civil. La Ley posibilitará la investigación de la paternidad.
4. *Los niños gozarán de la protección prevista en los acuerdos internacionales que velan por sus derechos.*

El Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos, adoptado mediante acuerdo de 28 de octubre de 2011 por los Ministerios de Justicia, del Interior, de Empleo y Seguridad Social y de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, la Fiscalía General del Estado y el Consejo del Poder Judicial señala las distintas fases por las que atraviesa una posible víctima de trata desde su detección, indica las actuaciones a llevar a cabo en cada fase e identifica a las administraciones públicas implicadas, estableciendo los mecanismos de coordinación entre ellas y su relación con otras organizaciones con experiencia acreditada en la asistencia a víctimas.

Este protocolo contempla específicamente la **situación de menores incurso en posible trata o explotación sexual**; el Anexo al mismo que se aprobó en una Reunión del Observatorio de Infancia denominado “Actuaciones para la detección y atención de víctimas de Trata de Seres humanos (TSH) menores de edad”, contempla el traslado de estos menores al **“recurso residencial más adaptado a sus necesidades” con personal con “formación especializada en la detección y tratamiento de víctimas de TSH”**. En concreto el apartado 6.3 del citado anexo establece que *“una vez identificada la víctima de TSH menor de edad, la Entidad Pública de Protección de Menores acordará de manera prioritaria el traslado a centros específicos con recursos personales y materiales especializados”*.

La Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (LOPVI), se relaciona con los compromisos y metas del Pacto de Estado contra la violencia de género, así como de la Agenda 2030 en varios ámbitos, y de forma muy específica con la meta 16.2: «Poner fin al maltrato, la explotación, la trata y todas las formas de violencia y tortura contra los niños.» dentro del Objetivo 16 de promover sociedades, justas, pacíficas e inclusivas. Esta ley tiene en cuenta las formas de violencia que las niñas sufren específicamente por el hecho de ser niñas y se aborda y previene, a la vez que se incide en

que solo una sociedad que educa en respeto e igualdad será capaz de erradicar la violencia hacia las niñas.

El título IV de esta Ley aborda específicamente actuaciones en centros de protección de personas menores de edad, establece la obligatoriedad de los centros de protección de aplicar protocolos de actuación, cuya eficacia se someterá a evaluación, y que recogerán las actuaciones a seguir en aras de prevenir, detectar precozmente y actuar ante posibles situaciones de violencia. Asimismo, se establece una atención reforzada, las actuaciones específicas de prevención, detección precoz e intervención en posibles casos de abuso, explotación sexual y trata de seres humanos que tengan como víctimas a personas menores de edad sujetas a medida protectora y que residan en centros residenciales.

Como siguiente paso, la Administración General del Estado, a través del gobierno, está promoviendo un Anteproyecto de Ley Orgánica integral contra la trata y la explotación de seres humanos, que incorpora mejoras en la protección de las víctimas.

Por su parte, la Comunidad de Madrid es también la Entidad Pública responsable de las competencias en materia de menores, dentro de su ámbito territorial, conforme al **artículo 148.1 de la Constitución Española** que atribuye a las CCAA la facultad de asumir competencias en materia de asistencia social, junto con lo dispuesto en el **artículo 10.3 de Ley Orgánica 1/1996 de Protección Jurídica del Menor, en su redacción dada por el artículo primero, apartado cinco de la Ley 26/2015, de 28 de julio, de modificación del sistema de protección a la infancia y a la adolescencia y la Ley 4/2023, de 22 de marzo, de Derechos, Garantías y Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia de la Comunidad de Madrid**

La Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad asume las competencias, en el ámbito territorial de la Comunidad de Madrid, en materia de protección de los menores en situación de desamparo y con ello a través de la Comisión de Protección a la Infancia y Adolescencia, se adoptan las medidas de protección necesarias para su guarda.

La trata de seres humanos es reconocida como una forma de violencia que afecta a las mujeres de manera desproporcionada, pues mujeres y niñas son sus principales víctimas y porque las formas de explotación a las que son sometidas suelen ser más severas, especialmente la trata con fines de explotación sexual. Se calcula que anualmente alrededor de 4 millones de personas son víctimas de trata en el mundo, de las cuales el 80% son mujeres y niñas y en el 50% de los casos son menores. En la gran mayoría de los casos la trata de personas se destina a la explotación sexual a través de la prostitución.

Desde que la Oficina de Naciones Unidas contra la droga y el delito recoge datos relativos a víctimas de trata, el porcentaje de niños víctimas no ha hecho más que crecer. Entre 2004 y 2011, el último año del que se tienen datos, el porcentaje de niñas víctimas de trata se ha duplicado, pasando de un 10% a un 21%. Según datos de Eurostat de 2015, entre 2010 y 2012 – los últimos datos disponibles- en los 28 países de la Unión Europea, el 19% de las víctimas de trata registradas eran menores de edad, en concreto, 5.700 víctimas.

Según datos aportados por la entidad Save the children, hasta 26 niños y niñas fueron identificados por fuerzas policiales como víctimas de trata en España en 2023, un 160% más en solo un año. Si se incluyen las personas adultas, el número total de víctimas asciende a 1.180 personas (un incremento del 31% más) y recuerda que en los dos últimos años, según datos del Ministerio de Interior, 819 niños y niñas migrantes desaparecieron de los centros de protección sin que se conociera su paradero.

Lo que demuestra este dato es la rápida mutación y ocultación del fenómeno, ya que las redes de trata se adaptan continuamente a las nuevas rutas y flujos migratorios, a la vez que modifican sus métodos de captación y perfeccionan sus técnicas de manipulación y coacción para asegurarse el control de las víctimas así como a la dificultad de detectar la situación, especialmente, en menores, a pesar de la encomiable labor llevada a cabo por todos los

agentes implicados y los protocolos y herramientas disponibles en la Web del Ministerio de Interior.

La Comunidad de Madrid ha sido pionera en la lucha contra la violencia de género, implantando servicios de atención para víctimas de trata ya desde el año 2007, a raíz de la aprobación de la Ley 5/2005, de 20 de diciembre, Integral contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid, que, además de la violencia de pareja o ex pareja, que recoge como supuestos intolerables que también dan forma a la violencia de género: la mutilación genital femenina, el acoso sexual, las agresiones y abusos sexuales contra las mujeres, **la trata de mujeres con fines de explotación sexual o la inducción a una mujer a ejercer la prostitución.**

Mujeres y niñas son las principales víctimas de la trata, por lo que debe prestarse especial atención a la **dimensión de género en el abordaje** de la lucha contra la trata de seres humanos, así como a la edad como un factor de vulnerabilidad en la captación, y para atender eficazmente a las necesidades específicas de las víctimas.

Esta realidad responde a unos perfiles muy concretos y que responden a unos perfiles muy concretos, que requieren de una atención especializada, tanto para su posible detección como para su intervención y dado que algunas pudieran estar sujetas a amenaza y/o coacción.

Es voluntad de la Comunidad de Madrid poder atender adecuadamente a estas menores, de manera que no solo se pueda detectar la posible situación de víctima de explotación sexual sino que, en su caso, la menor pueda recibir la ayuda profesional más adecuada a su situación, tanto física como psicológica.

Es necesario dar respuesta a esta especial situación de desamparo que pueden sufrir estas menores y para ello, la Administración debe de contar con todos los recursos que estén a su alcance, entre ellos, aquellas Asociaciones y/o Entidades especialmente sensibilizadas y formadas en la materia que nos ocupa.

La red de centros de protección de menores de la Comunidad de Madrid está compuesta por centros de carácter abierto, sin medidas extraordinarias de seguridad, por lo que, en ocasiones de grave riesgo para la menor (que pudiera estar amenazada o en peligro por estar inmersa en alguna de las redes de explotación o trata que se detecten), **la Red de Centros de Protección no está preparada para atender esa necesidad**, que además puede suponer un riesgo añadido para el resto de menores. Por ello, resulta de especial importancia poder contar con la posibilidad de derivar el cuidado y atención de la menor en un primer momento y en tanto se valora la posibilidad de integración en condiciones de seguridad en un centro con otros chicos y chicas de su edad.

Además, respecto a menores, el *Protocolo Marco sobre determinadas actuaciones en relación con los Menores Extranjeros No Acompañados* aprobado mediante Resolución de 13 de octubre de 2014, y publicado en el BOE de 16 de octubre de 2014 y en el que tuvo una participación activa en su elaboración la Dirección General de Infancia, Familia y Fomento de la Natalidad recoge recomendaciones y actuaciones concretas en los casos de posible víctima de trata y/o explotación sexual, entre ellas, **la opción de recursos especializados.**

La Comunidad publicó la Estrategia Madrileña contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual 2016-2021 y cuyo **OBJETIVO 3** recoge las medidas dirigidas a la atención de las situaciones de mayor vulnerabilidad: víctimas de trata con fines de explotación menores de edad, mujeres con discapacidad física y/o psíquica, problemas de salud mental, drogodependencia, mujeres con menores a cargo y siendo **la medida 3.1 la creación de un centro de acogida para la atención a menores víctimas de trata.**

El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó por unanimidad, en su sesión del día 15 de noviembre de 2016, una Proposición no de Ley por la que se instaba al Gobierno a promover la suscripción de un Pacto de Estado en materia de Violencia de Género por el Gobierno de la Nación, las Comunidades Autónomas y Ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias, que siguiese impulsando políticas para la erradicación de la violencia sobre la mujer como una verdadera política de Estado.

En su Eje 8 se contempla la visualización y atención de otras formas de violencia contra las mujeres, prestando especial atención a la violencia sexual, a la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual, a la mutilación genital femenina y a los matrimonios forzados y de conformidad con el Convenio del Consejo de Europa para prevenir y combatir la violencia contra la mujer y la violencia doméstica (Convenio de Estambul), de 2011, se incluyen todos los actos de violencia basados en el género que impliquen o puedan implicar para las mujeres daños o sufrimientos de naturaleza física, sexual, psicológica o económica, incluidas las amenazas de realizar dichos actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, en la vida pública o privada.

El recurso cuya gestión se licita es el que da cumplimiento al mandato de la Estrategia y el Pacto de Estado, por lo que teniendo en cuenta estas competencias y careciendo de medios propios suficientes y adecuados, en virtud del art.131 de la LCSP, se debe acudir a la licitación de un contrato de servicios, cuyo objeto consiste en el acogimiento temporal de menores que pudieran estar incursas en una red de trata con fines de explotación sexual y, una vez tuteladas, requieran ser atendidas por un servicio especializado y con determinadas medidas de reserva y seguridad en atención a su posible situación de testigo protegido, con cargo a la Dirección General de Infancia, Familias y Natalidad.

La guarda residencial de estas menores comprenderá no solo la satisfacción de sus necesidades materiales sino todo el apoyo psicológico que la menor pudiera requerir, así como el acompañamiento y asesoramiento en los posibles trámites judiciales y de otro tipo que pudiera derivarse de su posible inclusión en la red de trata. Además, se velará por su adecuada integración social y educativa facilitándole la formación o el acceso a ella en condiciones de seguridad en función de cada caso.

Por ello, es un recurso con una clara vocación de transitoriedad, en tanto se puede realizar el paso del menor, en condiciones de seguridad, a un centro de la red ordinaria de protección de menores donde poder desarrollarse en condiciones de igualdad con otros menores de su edad.

Con el objeto del contrato se están cumpliendo los principios que rigen la contratación pública, fundamentalmente, los principios de igualdad y no discriminación, transparencia, publicidad y libre concurrencia.

Por lo expuesto, de conformidad con lo establecido en el artículo 28 de la LCSP, se propone la contratación citada anteriormente.

En Madrid, a la fecha de la firma

LA DIRECTORA GENERAL DE INFANCIA,

FAMILIA Y FOMENTO DE LA NATALIDAD

Firmado digitalmente por: VALMAÑA OCHAITA SILVIA
Fecha: 2024.05.22 15:47

Fdo.: Silvia Valmaña Ochaíta